

LA EMPRESA PRIVADA FRENTE A LOS TRES PROBLEMAS NACIONALES: EL PLAN NORTEAMERICANO, LAS ELECCIONES Y LA GUERRA

Francisco Javier Ibisate

RESUMEN

Con frecuencia las teorías son más fuertes que la historia y se mantienen a contracorriente de los hechos. Tal parece ser el caso del llamado sector de la empresa privada: su parámetro económico-político es la ley del mercado. Elecciones libres en el mercado político, cuando lo histórico es una sangrienta guerra civil y una intransigente resistencia a cualquier forma de diálogo. Mercado libre cuando la economía está en la mayor crisis y no hay ni poder de compra ni ánimo para la producción más elemental. ¿Qué es lo que se puede escoger en lo político y en lo económico? La teoría del mercado libre también falla porque "la mano invisible" es demasiado visible: el plan norteamericano, el gran capital señala qué producir y cuándo elegir. Y cuando se elige y se produce la guerra no quedan recursos para la producción del sector de la empresa privada, que se ve sometido a la tirantez de votar por la guerra y ser destruido por la misma guerra.

Todavía están frescas las "diez tesis críticas" que el editorial de ECA (abril-1982) presentaba como una guía de interpretación de las pasadas "elecciones y unidad nacional". A un año de distancia no podemos esperar que hayan cambiado las posiciones ideológicas, en este caso las de la empresa privada, en relación a los temas siempre vivos del plan norteamericano para el país, las elecciones y la guerra. Más bien podremos apreciar cómo a lo largo del año y a contracorriente de los hechos se van afincando entre sus partidarios los principios que mueven a este sector y cómo llegan a ser víctimas de sus propias construcciones.

La lógica de la empresa privada se va a mantener en el campo político como en el económico: "respetar las leyes del mercado". Las elecciones serán presentadas y defendidas como el "mercado vivo"; poco importa que algunos "productores-políticos" no hayan tenido oportunidad de presentar su proyecto de gobierno ante el pueblo, y poco importa que una buena parte del pueblo no haya podido o no haya querido votar, o que lo haya hecho por mero formulismo obligado. Las elecciones seguirán siendo el mercado democrático para la conducción política. La economía de mercado es el mercado económico, la expresión de la libertad general. El que una

buena parte de la población, por razones estructurales y coyunturales, "quiera comprar y no pueda" y que el prolongado decreto 544 les mantenga en esa impotencia económica, es simplemente un tributo a la inflación que castiga a "todos", pero no destruye la teoría del voto popular. Sin embargo, la empresa privada será víctima de sus propios principios: en el juego del mercado quien manda es el "gran capital", y a esto en el país se llama el plan norteamericano para El Salvador. El pasado año, de marzo a marzo, ha sido un pacto de "toma y daca", alternando los vótores y los vituperios según la música que tocaba el visitante de turno.

Tal es el sentido de la tesis primera: "El proceso electoral de la Asamblea constituyente no fue una propuesta surgida de las necesidades reales del país en su coyuntura actual, ni del pueblo salvadoreño, sino que fue inicialmente una imposición de los EE.UU., y esto no con el propósito de descubrir cuál era la voluntad nacional, sino con el de llevar adelante el proyecto trazado por el gobierno norteamericano para acabar con el conflicto salvadoreño."

Si para los EE.UU. era preciso hacer algo en la línea de la solución política, que diera apariencias de legitimidad a los problemas de los derechos humanos, de la guerra, de la crisis económica y de la ayuda internacional (en marzo de 1982 y de 1983), para la empresa privada las elecciones eran un medio legítimo para desembarazarse de las reformas emanadas de un revanchista "comunitarismo" y justificar la eliminación, por vía militar, del peligro comunista. Por ello, con fecha 12 de marzo, Alianza Productiva denunciará las maniobras contra las elecciones: una serie de rumores hacían sospechar la presencia de un plan para retrasarlas, dando tiempo a negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el FDR, coincidiendo con los objetivos de la Democracia Cristiana de apoyarse en la extrema izquierda para contrarrestar la fuerza creciente de los partidos democráticos. "El pueblo salvadoreño debe estar preparado para defenderse de esta maniobra, verdadera traición a sus legítimas aspiraciones de establecer, al más breve plazo posible, un gobierno elegido por el voto libre y directo de los ciudadanos" (ECA, 1982, p. 314).

También FENAPES alentó al pueblo a participar en el proceso electoral, pero los argumentos eran de otra índole: "...un nuevo ordenamiento que evite los errores e injusticias del pasado, a través de una mejor distribución de la ri-

queza y un trato más justo al sector laboral obrero y campesino" (ECA, 1982, p. 315).

La tesis quinta y sexta, a que nos venimos refiriendo, muestran que las elecciones tuvieron mucho de las características del "mercado capitalista salvadoreño": "El evento de 28 de marzo, a pesar de no constituir unas elecciones nacionales", pues no dieron lugar a la expresión de todos los votos, "constituyeron un acontecimiento político de una gran importancia" porque fueron un triunfo relativo de la derecha y de la ultraderecha. Pero al mismo tiempo este grupo de poder encontró la resistencia infranqueable de los EE.UU. y del Alto Mando de la F.A., quienes impusieron el presidente provisional, los tres vicepresidentes y el reparto de las carteras gubernamentales entre ARENA, PCN y DC.

Durante la primera quincena de abril tanto las asociaciones de la empresa privada como los cinco partidos de derecha escalonaron manifiestos, que desde su ángulo de vista traducían la voluntad popular: "un no rotundo a la violencia; un rechazo del comunismo y comunitarismo; adhesión al sistema democrático y representativo como forma de gobierno, al sistema económico de libre empresa, y pleno respeto a los derechos humanos y a la justicia social como fundamentos para una convivencia armónica; mantenimiento y perfeccionamiento de las reformas socioeconómicas realizadas en estructuras e instituciones nacionales, en forma que, sin intenciones políticas de ninguna clase, las vuelvan operantes y realmente beneficiosas; la unidad de toda la familia salvadoreña en aras de la restauración moral y económica de la Patria" (Proceso, No. 58, p.12). No significa esto que todas las agrupaciones, masculinas y femeninas, de la empresa privada aprueben y den el mismo significado a cada una de estas cláusulas, al igual que cada uno de los partidos políticos firmantes. Donde sí se dio la máxima unanimidad entre los grupos de la empresa privada fue en la virulenta reacción ante la mencionada imposición del presidente y vicepresidentes provisorios, abriendo así una fisura que se fue ampliando. Se censuró la presión norteamericana, se la calificó de "golpe de Estado", "maniobra descarada"... "Es inaudito que quienes pretenden ayudarnos a salvarnos del comunismo, vengan ahora a dar un golpe con manos propias en el seno de la Asamblea Constituyente... La Patria está en peligro de hundirse en la miseria, en el caos político y en la infamia de la intervención extranjera... La Asamblea Consti-



La lógica de la empresa privada se mantiene en el campo político y en el económico: respetar las leyes del mercado. Las elecciones se representan y defienden como el mercado cívico...

tuyente es el poder máximo del Estado, al cual están supeditados los Organismos de Gobierno, incluyendo la F.A.; por eso la Asamblea es la que debe formar el gobierno sin presiones de ninguna naturaleza y debe hacer caso omiso de toda clase de presiones, sean de carácter interno o internacional" (Proceso, No. 61, p.5).

La cita, algo larga, sirve para mostrar la grieta que se fue abriendo entre el sector de la empresa privada, por una parte, y por la otra, el gobierno norteamericano con sus presiones y condicionamientos, la F.A. por su baja "productividad militar", y hasta los propios partidos políticos, sus representantes en el poder, que cabildeaban la prosecución "técnica" de las reformas estructurales, sin ponderar el desastre económico que se ha derivado de las mismas. Ya a los quince días de las elecciones comenzaron a aflorar estos motivos de discordia. Hay que hacer mención especial de la rama femenina, que bajo los aguerridos epígrafes de "frente y cruzada" utilizó un lenguaje no muy en consonancia con el vocabulario permitido en "estado de sitio."

La última semana de mayo y primera de junio fue una quincena típica para entender el juego de ajedrez en que estaba metida la

empresa privada. El gobierno norteamericano amenazó con la "torre": la suspensión temporal del Decreto 207(24-5-82) y la polémica sobre continuación o suspensión de las reformas, coincidió con la decisión del Senado de recortar 100 millones de dólares en la ayuda programada para El Salvador y condicionar el resto a la continuación de las reformas. Estas declaraciones amenazaban el campo de acción de la F.A. y el Gral. García adelantó su "caballo": "el deseo de la F.A. es que no haya ningún retroceso en las reformas ya establecidas; ello significaría poner causales para tener problemas de todo tipo...; la pacificación es lo importante". La empresa privada tuvo que maniobrar para salvar su "reina" y visitó al presidente de la Asamblea Constituyente para plantear sus demandas, dar un respaldo tácito a la política que seguía y denunciar la intervención extranjera: "tenemos fe que con este nuevo gobierno se podrá trabajar para lograr la recuperación económica del país, ya que ahora se puede hablar otro lenguaje entre éste y los sectores productivos". Y el Mayor D'Aubuisson ofreció toda protección: "ha pasado ya la época en que se mantuvo marginados a los sectores productivos; ahora el país ha

vuelto al espíritu de la libre empresa... a pesar del desgobierno que hubo durante dos años"... Aseguró también que se analizarían los "desastres de las reformas y se harían algunos cambios"; que la ayuda exterior sería utilizada en "rubros más productivos" que dejaran ganancias, y que "primero está la recuperación económica y luego la pacificación del país" (Proceso, No. 66).

La empresa privada, masculina y femenina, replicó con el **go-home** al embajador Hinton y a ciertos senadores, recordándoles que El Salvador era "un país libre, soberano e independiente" y que no podían chantajear sus intromisiones con una "miserable ayuda". Hinton se extralimitó en sus actuaciones como embajador, tomándose atribuciones de prócsul. Si desean reformas, háganlas en su propia casa, pues ellas sólo favorecen a países que "como ustedes sacan provecho, no sólo con los altos intereses de sus préstamos, sino con las millonarias ventas de armas, provocando así guerras revolucionarias entre hermanos" (Proceso, No. 67, p.3). Es interesante que los defensores del libre mercado experimentan en carne propia las consecuencias del mercado libre.

Por los mismos días, las ocho entidades empresariales que integran la Unidad Productiva de El Salvador dieron a conocer las conclusiones y recomendaciones de su II Simposio Nacional. En lo político las elecciones fueron un rechazo a "los modelos reñidos con nuestra idiosincrasia, como el marxismo-leninismo, el socialismo y el comunitarismo". En lo económico, la economía del país no se ha derrumbado por la tenacidad empresarial y la laboriosidad del pueblo. La crisis tiene como causa principal el caos jurídico que creo el gobierno del PDC, al emitir un sinnúmero de decretos demagógicos, así como las actividades destructivas de los grupos subversivos, y algunos factores externos como la baja de los precios de los productos de exportación... Las reformas han llevado al desastre; su impulso fue el revanchismo y el prejuicio, y se marginó del proceso la técnica y la lógica. No se debe continuar con nuevas reformas, y hay que hacer antes una evaluación de sus efectos económicos, políticos, sociales" (Proceso, Nos. 66-67).

Por su parte los representantes de la Pequeña Empresa (FENAPES) señalaron que la desprotección del sector "se ha agudizado" y advirtieron que "el receso económico nos pone en la frontera del desempleo y subempleo, aparte de que no hemos visto que ningún partido político,

de los representados en la Asamblea Constituyente, haya tomado como suya la bandera del fortalecimiento y desarrollo de la Pequeña Empresa, lo cual nos mantiene en la incertidumbre del futuro" (Proceso, No. 67).

Al mes siguiente siguió aumentando la presión de la olla. El "Memorandum Confidencial" (mayo-82) enviado por el Secretario de Estado a la embajada de EE.UU. en el país (Proceso, No. 72), pareció ponerse en movimiento con la visita de los congresistas Edward y Lewis, quienes necesitaban llevar datos concretos sobre el avance del programa de derechos humanos y de las reformas sociales, que avalaran la certificación de Reagan ante el Congreso. Los congresistas declararon "llevar la impresión de que aquí no se sabe quién manda; la Reforma Agraria está estancada y tampoco mejora el respeto a los derechos humanos". Dijeron que "no podían responder quién estaba poniendo trabas a las reformas, pero si el gobierno no las cumple, es el gobierno el responsable". El Congreso necesitaba respuestas concretas y lo que encuentran son "palabras, palabras, palabras" (Proceso, No. 71).

Estas declaraciones coincidieron con las "confesiones económicas" hechas por el vicepresidente del Banco Central de Reserva, que revelaban la magnitud de la crisis en determinados sectores de la economía nacional. Por su parte, el Ministro de Hacienda volvió a recordar que defensa y seguridad eran los rubros del gasto público que tenían prioridad. No es de extrañar la amarga reacción del presidente de la Asamblea Constituyente ante las posibles restricciones de la ayuda norteamericana: "la F.A. necesita la ayuda de los EE.UU., pues no sólo lucha por salvar a nuestra patria de una dictadura marxista-leninista, sino también defienden los intereses estratégicos de los EE.UU." Por su parte el presidente de la ANEP manifestó que los EE.UU., debían tener en cuenta que si "cortan la asistencia militar a El Salvador, prácticamente estarán colocando a nuestro país en las manos de la URSS". Explicó que los empresarios habían viajado a Washington para exponer la realidad salvadoreña, pero "hemos tenido la desgracia de ser poco oídos" debido a la prensa, a la "presión de algunas organizaciones de tendencia marxista muy poderosas" y a la "influencia que logran los congresistas y senadores". Declaró, además, que el gobierno provisional no había puesto en práctica medidas para solucionar los problemas más graves que afectaban al sector empresarial (falta de divisas y financiamiento), ni había lla-

La empresa privada es víctima de sus propios principios: en el juego del mercado manda el gran capital que en El Salvador se llama Estados Unidos.

mado a los hombres propuestos por la iniciativa privada, para ocupar puestos gubernamentales (**Proceso**, No. 72).

Se ampliaron así las fisuras entre la empresa privada, por un lado, y la Fuerza Armada y gobierno, por el otro. El sector productivo planteó dos grandes inquietudes: ¿por qué la F.A. no logra controlar la situación de guerra? ¿Por qué la F.A. sigue apoyando unas reformas que sólo han producido el caos económico? Hubo acusaciones implícitas y más que implícitas de que en la F.A. "hay jefes y hay otros que reciben órdenes", criticando al alto mando y felicitando a los oficiales que estaban en el frente... El Gral. García replicó que la F.A. "es una institución que sabe lo que está haciendo y cuáles son sus obligaciones, y nadie tiene que recordarle porque está cumpliéndola en la mejor forma posible". Y a continuación el Ministro de Defensa leyó la larga lista de bajas sufridas (**Proceso**, No. 74).

Por añadidura, la entrega de títulos a beneficiarios del Decreto 207, presentes algunos jefes del ejército, y la insistencia de la F.A. en apoyar las reformas generó un desacuerdo con representantes de la empresa privada, que reclamaron públicamente un retorno incondicional a la "economía de mercado". Mientras, el Frente Femenino respondía al Gral. García con su propio adagio: "zapatero a tus zapatos", que traducido significa que la F.A. no debía andar metida en reformas agrarias.

Durante los meses de agosto y septiembre aumentaron las tensiones entre representantes del sector productivo, en este caso productores de bienes tradicionales de exportación (Foro Nacional del Café), y los representantes del ejecutivo y del B.C.R., que en nada parecían preocuparse por resolver la situación crítica de tales productos y productores. En forma bastante explícita se estaba provocando la caída del presidente del BCR, "para poner una persona que sirva a los intereses de quienes quieren divisas a diestra y siniestra y préstamos elevados, argumentando que es para reactivar la economía nacional". Los sectores empresariales manifestaron su desagrado incluso hacia sus propios representantes en la asamblea, no satisfechos con la forma con que la dirigencia del partido estaba actuando en defensa de sus intereses (**Proceso**, Nos. 82-83).

Al mes de octubre le tocó, una vez más, ser testigo de las tensiones y ataques de parte del sector empresarial contra el ejecutivo y la F.A., y a continuación contra el embajador Hinton. El proceso iniciado contra el capitán Avila, involucrado en la muerte del expresidente del ISTA, fue sólo un primer motivo; el principal punto de fricción giró en torno a los créditos y las divisas. El sector de la empresa privada optó incondicionalmente por la "salida militar" del conflicto, y ahora le tocaba pagar las consecuencias de una "economía de guerra": la defensa y la seguridad nacional se llevará la parte del león. Además el BCR tuvo que plegarse a las condiciones impuestas por el FMI en la concesión de créditos. De todas formas, la agudización de estas confrontaciones, resultado de la prolongación del conflicto político-militar y de la crisis económica, podría llevar a los sectores privados más poderosos a intentar recuperar el control de la F.A. y ensayar su propio proyecto de solución (**Proceso**, No. 85).

Por su parte, Hinton declaró al diario **The London Times** que en El Salvador "las dos partes en conflicto no están en visperas de una negociación formal, pero sí en un proceso hacia el diálogo", por lo cual "hay contactos indirectos entre EE.UU. y las dos partes". No se hizo esperar la agresiva reacción de la Cámara de Comercio e Industria y de la Cruzada pro Paz y Trabajo, calificando la posible negociación como una "traición" que infiltrará el comunismo dentro del país. Tras la ayuda norteamericana "se disimula una intromisión política de la gran potencia contra la dignidad de El Salvador, lo cual no sería posible si no fuera porque encuentra en nuestro pueblo hombres de poca valía que se venden por unos dólares más" (**Proceso**, Nos. 85-86). La ocasión fue aprovechada para lanzar invectivas contra otros sectores propicios al diálogo-negociación, entre ellos la Iglesia católica, de parte de este sector que no admite otro diálogo que el de las armas y el de las balas; pero su "economía de mercado" se verá afectada por esta opción beligerante.

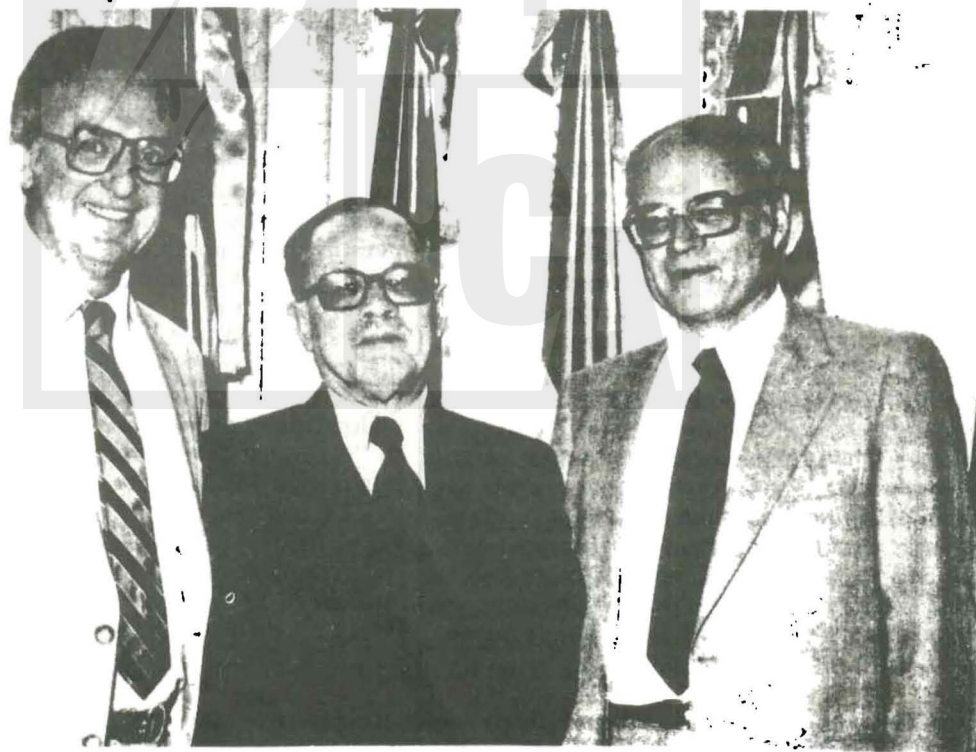
Lo que vino a poner más vinagre en la llaga fue el discurso de Hinton ante la Cámara de Comercio Americana (29-10-82) sobre el tema: "La Justicia en El Salvador". La reacción virulenta de la Cámara de Comercio e Industria, orquestada por la Cruzada pro Paz y Trabajo, fue más

emocional que racional: la réplica se fundamentó en los múltiples casos de injusticia jurídica existente a lo largo y ancho de los EE.UU., y los epítetos de actitudes proconsulares "propios de un delegado de la antigua Roma imperial", o "la amistad no es la mano que se tiende cuando en la otra se empuña el garrote", no desvanecieron en nada la veracidad de los datos objetivos mencionados por Hinton. Por su parte, Alianza Productiva volvió sobre el consabido argumento de que "el propuesto diálogo o negociación es simplemente una maniobra de los grupos subversivos para ganar tiempo, mientras reorganizan sus filas y reabastecen sus recursos logísticos, gastados en la larga lucha contra el ejército". La empresa privada está netamente a favor de la guerra (ECA, 1982, p. 1052: **Proceso**, No. 89).

Al cerrarse el año podemos hacer nuestra la siguiente evaluación: "El optimismo y esperanza que surge entre el sector privado en el contexto de las elecciones parece haberse disipado totalmente ante la manifiesta incapacidad del ejecutivo para articular un programa político y económico coherente y efectivo, y lo que se percibe como incapacidad del Alto Mando de la F.A. para hacer avances significativos en la guerra de contrainsurgencia. Los principales obstáculos para ello parecen surgir de la naturaleza artificial del gobierno de unidad nacional, impuesto por los EE.UU., ante los resultados de las elecciones

adversos a su proyecto, así como de la tolerancia y permeabilidad del Alto Mando a la injerencia y presiones crecientes de parte de los EE.UU. Durante el año las contradicciones entre los defensores del proyecto norteamericano y los propugnadores del proyecto del gran capital han venido incrementándose, manteniendo en un virtual estado de parálisis la gestión gubernamental y las tareas específicas de la Asamblea Constituyente. Estas contradicciones parecen exacerbarse aun más ante el nuevo planteamiento del diálogo sin condiciones que ha formulado el FDR-FMLN... Paradójicamente han sido los EE.UU., los principales opositores a esta alternativa política, no sólo para El Salvador, sino para toda la región, profundizando así durante todo el año las tensiones regionales y regionalizando peligrosamente los conflictos nacionales... Para El Salvador, los esquemas impuestos por los EE.UU., sólo han servido para consolidar en el poder a aquellos sectores que fueran desplazados por los intentos reformistas de 1979" (**Proceso**, No. 94).

El último día de 1982 se cerró con un manifiesto del Frente Femenino en el que atacó acremente al gobierno de unidad nacional y a miembros del Alto Mando de la F.A., con ocasión de que el presidente impuesto solicitara la renuncia a los ministros de su gabinete. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria presentó un análisis de la realidad nacional de 1982 y



sus proyecciones para 1983. El análisis se mantiene en un tono de datos estadísticos, que muestran el deterioro económico (ECA, 1983, p. 197-205). Algunos días después, la Cruzada Pro Paz y Trabajo, en un tono patriótico y emocional, apoyó la mencionada proclama del Frente Femenino y los ponderados análisis del Rev. Fuentes Castellanos. Simultáneamente la Unidad Popular Democrática (UPD) presentó un análisis de 1982, en los acápites: orden político, económico y social. Queda fuera de alcance del presente comentario hacer una comparación entre éste y los anteriores manifiestos o análisis. Basten dos párrafos como botón de muestra." Los sectores económicamente dominantes han realizado fuertes campañas criticando al Gobierno y a la Reforma Agraria como factor principal de los cambios; los algodoneros, cafetaleros, industriales, etc. han hecho presión para obtener financiamiento adecuado y han tenido éxito, pues gran parte del financiamiento externo se ha destinado a estos grupos minoritarios, lo que de por sí es un problema, ya que nadie garantiza el buen uso y resultado de esas inversiones, lo que además hace que se incremente el proceso de endeudamiento nacional. Prueba de la concepción que se tiene de los problemas económicos nacionales lo constituye la integración de la recientemente creada Comisión de Reactivación Económica Nacional, en la que no tienen representación los millares de obreros y campesinos que con su fuerza de trabajo constituyen el pilar de la economía nacional, además de ser la fuerza socialmente más importante del país" (ECA, 1983, p. 207).

En el mismo mes de febrero y siempre en la línea de defensa de los intereses de obreros y campesinos, la UPD publicó dos manifiestos solicitando la prórroga del Decreto 207 y la derogación de los Decretos 296, 507 y 544. Sirvan estas citas para mostrar que el sector de la empresa privada desplegó una intensa actividad político-económica *pro domo sua*, aunque en los manifiestos se utilizara continuamente el slogan del "voto popular".

Siempre bajo el ropaje patriótico-nacionalista las asociaciones femeninas tocaron música diferente para dos visitantes de turno. La Asociación de Mujeres Patrióticas organizó una manifestación de 200 personas para, entre otras

cosas, acusar al senador Christofer Dodd de propiciar el diálogo con la guerrilla y ser el líder de "opiniones preconcebidas contra el país". Dodd había dicho que no quería un gobierno marxista-leninista aquí, pero tampoco esta carnicería. "La paciencia del pueblo americano se está acabando, por lo que se hace necesario buscar fórmulas internacionales, con el apoyo de México, Panamá, Colombia y otros países, para hallar una solución pacífica a la guerra civil salvadoreña" (Proceso, No. 95). La música se tornó más alegre desde la llegada de Kirkpatrick; siete campos pagados le dieron la bienvenida y la elogiaron por su política como bastión de la libre empresa. Kirkpatrick aseguró: "Nuestra posición es clara y no va a cambiar. Nosotros apoyamos y continuaremos apoyando al Gobierno de El Salvador en su lucha contra la subversión armada. Continuaremos proporcionando ayuda militar y económica. Al mismo tiempo apoyaremos la reconciliación política en El Salvador, dando a todos la oportunidad de renunciar a la violencia para participar en las instituciones democráticas. Estamos opuestos fuertemente a las negociaciones sobre el compartir el poder. Pensamos que solamente la vía electoral es posible para formar gobiernos legítimos". La Cámara de Comercio le entregó un diploma de reconocimiento (Proceso, No. 99).

Con las últimas palabras de la Kirkpatrick volvemos a la tesis primera con la que comenzamos este comentario: "el proceso electoral ... fue inicialmente una imposición de los EE.UU. En efecto, la Administración Reagan empezó a negociar con el Presidente Magaña las posibilidades de adelantar las elecciones presidenciales programadas para marzo de 1984, tanto para dramatizar el compromiso por la democratización y reconciliación nacional como para persuadir al Congreso a fin de que apruebe los 60 millones de dólares solicitados por la Administración Reagan. Una indiscreción del enviado especial, Stone, quien descubrió antes de tiempo el gallo tapado, impidió el que esta decisión apareciera como un iniciativa salvadoreña" (Proceso, No. 102).

Lo menos que se puede decir es que se trata de unas elecciones improvisadas, que han sorprendido a los propios partidos políticos. El Comité Central de Elecciones ha tenido tiempo

La empresa privada ha optado por la salida militar del conflicto, pero se niega a pagar las consecuencias de una economía de guerra.

de descubrir dos cosas: que según dos técnicos de la OEA el sistema utilizado en las elecciones pasadas era "totalmente obsoleto" y que se localizaron 80.000 números de cédulas de identidad repetidos (**Proceso**, No. 106).

De todas formas si la orden viene de arriba y si viene avalada por la certificación de Reagan ante el Congreso, bienvenidas sean las elecciones. El presidente de la Asamblea Constituyente ya ha invitado a los grupos insurgentes a

participar en el próximo proceso electoral, aunque no dijo dónde se iban a colocar las urnas. Y la Cámara de Comercio e Industria, antes y después de la certificación de Reagan ante el Congreso, exhortó a todos los salvadoreños a que enviaran mensajes de apoyo y total respaldo a la política de Reagan. Lo único que han lamentado es que las elecciones sean en diciembre y esto pueda afectar gravemente al comercio. Pero donde manda capitán...

